

# Ideología vs. interés público

**MANUEL MIÑÉS MUÑOZ**

Director gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana - CCCV

El autor lamenta las trabas que desde el poder autonómico –y, en concreto, desde Compromís– se ponen a la colaboración público-privada

**E**n la memoria colectiva todavía permanece el juicio emitido por la entonces ministra de Cultura y hoy vicepresidenta, Carmen Calvo, que aun ejerciendo de jurista constitucionalista no dudó en afirmar que el dinero público «no es de nadie». Ello no hace sino corroborar que algunos políticos –quizás demasiados– creen que el cargo adquirido, les permite disponer del erario público no pensando en el bien común de todos los contribuyentes sino haciendo, más bien uso preminente y casi exclusivo en favor de sus congéneres en adscripción política, olvidando que los dineros públicos son patrimonio exclusivo del pueblo soberano.

En el acervo popular valenciano tenemos la expresión «Serà per diners?», poco afortunada que, puesta en boca de presuntuosos, busca deslumbrar a un auditorio, manifestando que, dado su potencial económico, puede hacer frente a todo tipo de caprichos, gastos, incluso desmanes. También, a veces, es usada por pobres hombres, faltos de recursos, que pretenden, sin conseguirlo, disimular sus carencias y miserias sobrevinidas lanzando promesas, inversiones y alardes, a las que no puede hacer frente. Ambos peculiares casos hay que desterrarlos. Ciertos partidos políticos autodenominados progresistas, y sus adláteres falsos ecologistas, están embarrando nuestra convivencia, imponiendo su ideología y frenando la iniciativa privada, mientras aspiran a una idílica y alineada capa social subsidiada y menesterosa y por tanto rehén del gobernante dadivoso.

Sus prejuicios ante la colaboración público-privada están dificultando la mejora y la sana competitividad de nuestro modelo educativo (público, concertado y privado), el fortalecimiento y la eficiencia de nuestro modelo sanitario, e impidiendo la eficacia y modernización de nuestra Administración, como exige la Unión Europea para recibir los fondos es-

tructurales. Un somero análisis de nuestra Comunitat nos ofrece este triste panorama económico. De menor a mayor deuda, la Comunitat Valenciana se encuentra en la 12ª posición de las CC. AA (hemos cerrado el 2º trimestre del 2020 con 49.977 millones de euros de deuda, equivalentes al 46% del PIB, cuando la media de las CC. AA españolas está en el 26%). Nuestro desempleo alcanza el 17'3%, con 423.000 parados, frente una tasa de paro nacional del 15'33%, y para no abrumarnos con más números, solo recordar que ante unos Presupuestos consolidados para el actual 2020 que alcanzan los 24.299 millones de euros (Presidencia, dos vicepresidencias, once consellerías, Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes, Consell de Cultura, etc. etc., más las transferencias a empresas y sociedades Públicas) existe una consellería sin conseller ni funcionarios que es el Servicio de la Deuda, que con 6.372 millones de euros –solo superada por los 6.757 de la Sanidad pública– ya supone el 26'22% de nuestro presupuesto. Serà per diners?

Ante esta situación -financiera, debida sólo en parte a una infrafinanciación, que ningún Gobierno le da solución, somos la sociedad civil en general y los empresa-

rios en particular, los que debemos jugar un papel fundamental, implicándonos de lleno en la reconstrucción social y económica, vía Fondos Europeos, que solicitamos cogestionar. No podemos consentir, por ejemplo, que se revierta el Hospital de Torrevieja cuando desconocemos cuánto dinero y cuan peor asistencia sanitaria van a recibir los usuarios. Serà per diners? Es la Sindicatura de Comptes quien califica como el más eficiente de la red valenciana al Hospital de Torrevieja, a la vez que informa que el de Alcira, a los dos años y medio de su reversión, nos cuesta a los valencianos 76 millones más al año.

Si hablamos de carreteras, no podemos consentir que tras más de 10 años de proyectos y múltiples declaraciones de impacto ambiental las 'mejoras funcionales y de Seguridad vial, y medidas de integración ambiental de la A-7 (by-pass), verdadero embudo del Corredor Mediterráneo viario, sea nuevamente cuestionada por Compromís con el silencio cómplice de Presidencia y de la Consellería de Política Territorial.

Ante este ataque frontal al progreso e iniciativa público-privada por parte de partidos como Compromís, nacionalista-catalanista, los actores económicos empresariales y profesionales liberales valencianos debemos dar un paso al frente exigiendo la equiparación y el trato equitativo que la Comunidad Valenciana merece en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y plantearle seriamente al presidente Puig que exija a sus socios del Botànic un comportamiento constitucional y positivista ante los fondos estructurales. Su ideología política debe asumir que el dinero público es de todos los contribuyentes de la Comunitat y es insuficiente para mantener a nuestra estructura autonómica si no es impulsando de verdad a un empresariado emprendedor, a la vez que ya hastiado y beligerante ante semejantes seudos progresismos y nacionalismos excluyentes que reman contracorriente.



MARTEN BJORK